

Dossier de prensa

27/05/2022 – 02/06/2022



NOTICIAS

[Viernes, 27 de mayo 2022](#)

Francisco Pérez

“Corregir la financiación debería ir acompañado de corregir el endeudamiento con una condonación”, El Economista CV (PDF).

Rafael Doménech

Pensiones: reformas insuficientes, Expansión (PDF).

[Sábado, 28 de mayo 2022](#)

Joaquín Maudos

La cuarta parte de los créditos a empresas de sectores vulnerables están en riesgo de impago, El País ([enlace](#)).

Rafael Doménech

Los jubilados reciben en sus pensiones más de lo que cotizaron, Finanzas.com ([enlace](#)).

[Domingo, 29 de mayo 2022](#)

Rafael Doménech

La inflación golpea a los ‘millennials’, la generación de la doble crisis, ABC (PDF).

[Lunes, 30 de mayo 2022](#)

Joaquín Maudos

La inflación hunde los sueldos y los márgenes de las empresas, Mallorca Diario ([enlace](#)).

Jose Emilio Boscá

Los precios rompen su tendencia a la baja y vuelven a subir en mayo hasta el 8,7% desbaratando las previsiones, COPE ([enlace](#)).

Jose Emilio Boscá, Rafael Doménech y Javier Andrés

Bruselas examina al INE en plena ofensiva del Gobierno, El Mundo (PDF).

Francisco Pérez

“El 73% de la deuda valenciana se explica por la infravaloración”, El Economista nacional (PDF).

[Miércoles, 1 de junio 2022](#)

Rafael Doménech

El Foro de Expertos del Instituto Santalucía aconseja potenciar los tres pilares del sistema de pensiones, Siglo XXI ([enlace](#)).

[Jueves, 2 de junio 2022](#)

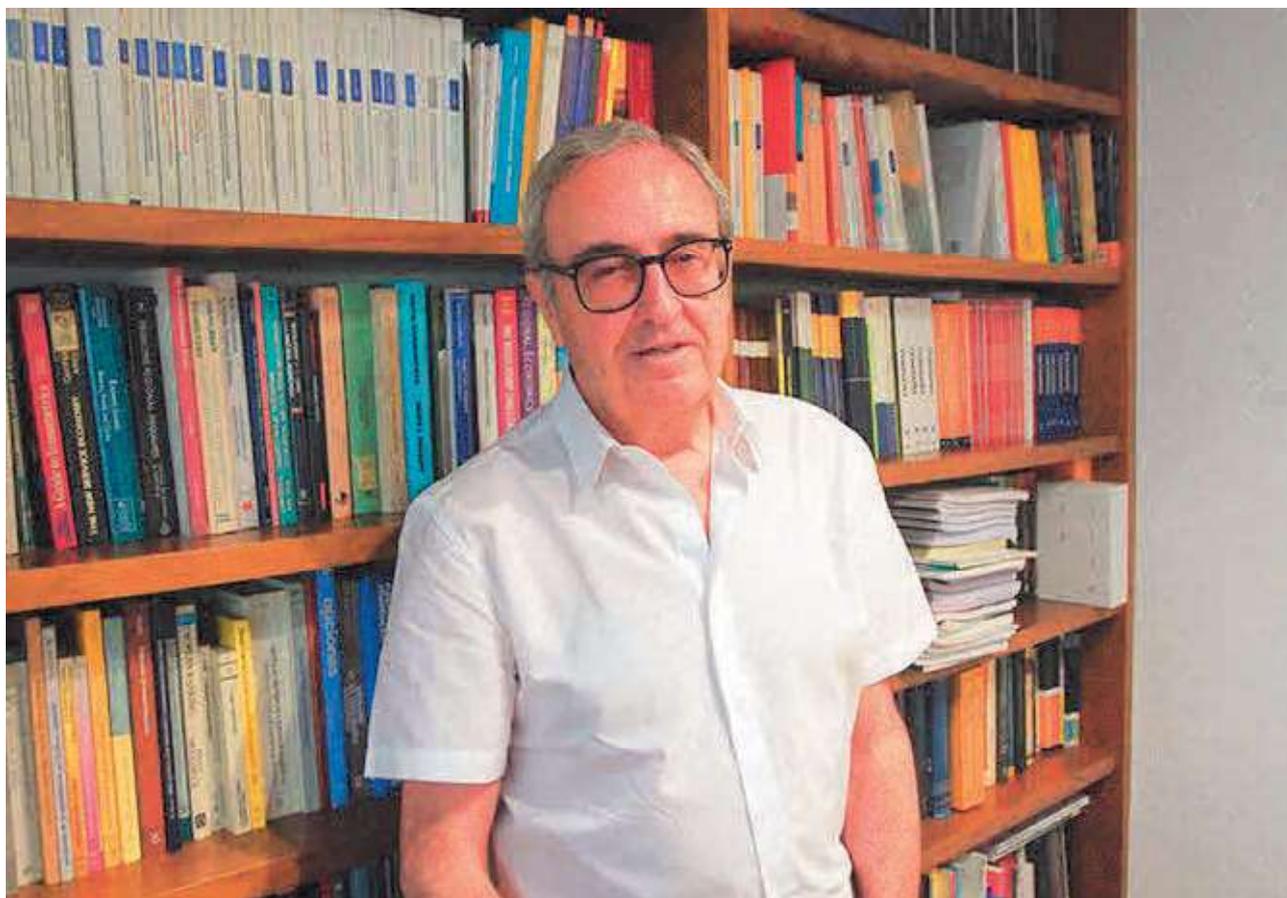
Rafael Doménech

El empleo y las empresas en España se recomponen tras el Covid, Málaga Hoy ([enlace](#)).

Los expertos ponen en cuarentena la recuperación del empleo y la reforma laboral, Cinco Días ([enlace](#)).

FRANCISCO PÉREZ

Director de Investigación del Ivie y coordinador del Comité de Expertos en financiación autonómica



“Corregir la financiación debería ir acompañado de corregir el endeudamiento con una condonación”

El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha sido durante años la cara valenciana más visible en el debate técnico de la reforma de financiación. Tras el reconocimiento de la población ajustada por Hacienda, advierte del doble filo que suponen algunos criterios de la propuesta del ministerio.

Por Ángel C. Álvarez. Fotos: Guillermo Lucas

La sensación que tienen la mayoría de los valencianos con la reforma de financiación autonómica es que los años pasan sin avances. ¿Es así?

Avances hay pocos. El más importante que se ha producido es el reconocimiento del problema, y no es insignificante, porque hubo un tiempo en que se negaba. En estos años ha habido varias circunstancias que han conducido a que eso cambie. Por un lado un tra-

bajo técnico continuado y la toma de conciencia de los partidos políticos valencianos y de los agentes sociales. Pero lo importante es que se solucione el problema y ahí siguen sin darse pasos. El argumento suele ser que se requiere de un amplio consenso que es difícil de conseguir ahora, pero creo que todos pagamos un precio por no hacer reformas que están justificadas. Tiene consecuencias porque retrasa que el despliegue

del Estado del Bienestar se haga en las mismas condiciones en toda España.

Desde Valencia se reivindicaba el criterio de población ajustada como base de la reforma. Sin embargo, el informe del comité del que forma parte no considera tan positiva la propuesta del Ministerio

El criterio de población ajustada quiere decir que si queremos que haya igualdad de condiciones financieras para los servicios que dependen de las CCAA el reparto tiene que hacerse de acuerdo con un criterio de necesidad. Lo fundamental es la población, pero puede estar justificado ajustar el número de habitantes para tener en cuenta diferencias relevantes. La Comunitat Valenciana asume la defensa del criterio de población ajustada porque recibe menos recursos de los que tendría por habitantes. Actualmente no se sigue ese criterio, porque aunque una parte del modelo se reparte en proporción a una población ajustada, otras partes

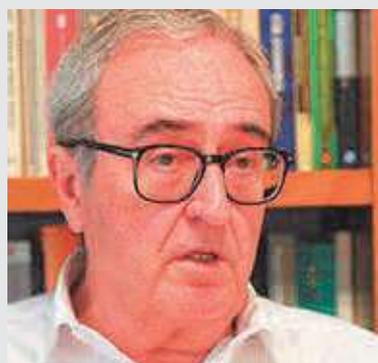
ción ajustada tiene una parte que no nos convence. Sugerimos mejoras en lo que tiene que ver con las variables demográficas. Después hay otras variables, que son geográficas, en que los criterios propuestos nos parecen menos convincentes. Y además se plantea otra posible variable: el tamaño de las comunidades para tener en cuenta que las pequeñas podrían tener unos costes fijos que les pesaran más. Con esto último hemos sido muy críticos porque no se concreta la forma de ponderar las variables y algunas de esas posibilidades podrían volver a dar lugar a diferencias de financiación por habitante que nos parecen injustificadas.

Con la propuesta planteada entonces, ¿podría mantenerse la situación de infrafinanciación valenciana?

Dentro de lo que se ha planteado podría volverse a dar una situación de infrafinanciación relativa, pero también dentro de la propuesta se podría dar la solución al problema.

“Se ha producido el reconocimiento del problema, pero lo importante es solucionar el problema y ahí siguen sin darse pasos”

“Con la propuesta podría pasar que en nombre de la población ajustada se justifiquen diferencias como las actuales”



responden a otros criterios y desfiguran el resultado de la población ajustada. Por eso se reivindica un criterio de población ajustada razonable y eliminar lo que no es población ajustada del modelo, por ejemplo el *statu quo*, que supone que si a una comunidad le tocan menos recursos por población ajustada y antes tenía más se le siguen dando los de antes.

¿Qué es lo que critican de la propuesta inicial presentada por Hacienda?

El Ministerio ha elaborado un documento que discute como se podría calcular esa población ajustada, pero no dice nada de una parte muy importante, que es eliminar los otros fondos, porque si no estaremos en las mismas. Los recursos que van por esas otras vías tienen que repartirse también por población ajustada. Además, la propuesta técnica sobre los criterios para calcular la pobla-

Dependerá del cierre de la propuesta. Al final podría pasar que en nombre de la población ajustada se acabaran justificando diferencias de financiación tan grandes como las actuales.

Ha comentado las variables geográficas, ¿qué fórmulas aceptaría para contentar a las autonomías que precisamente alegan mayor gasto por la dispersión de población?

Tienen que ser alternativas razonadas y justificadas. Una variable que está en el modelo actual es la dispersión y es cierto que es un elemento que puede justificar el encarecimiento de algunos servicios, por ejemplo mantener escuelas o consultorios médicos en núcleos más pequeños para no desatender a la población. Lo que hay que medir bien es la variable de que se considera para la fórmula. Actualmente se considera el número de entidades administrativas y sólo Galicia

concentra el 50% de estas entidades, lo que condiciona el resultado. En el caso de los costes fijos y el pequeño tamaño nosotros lo hemos estudiado según los gastos en los presupuestos de las autonomías. Los datos que hay nos dicen que no representan más del 0,5% no se puede colocar una cifra para gastos fijos de entre el 1% y el 2%, que suponen 1.000 millones.

Sorprende que el informe de los expertos valencianos cuestiona el criterio de las tarjetas sanitarias emitidas por las CCAA para medir el gasto sanitario.

Ese criterio a priori parece muy razonable. Pero hay una pregunta que tiene sentido. ¿Estamos seguros que en todas partes se sigue el mismo criterio al hacer la estadística? Los datos pueden no ser comparables y por eso es importante depurar las estadísticas. En la información administrativa que no es pública no se produce esa depuración. ¿Se está haciendo con los mismos criterios las cosas

zodable para eso es el que se está aplicando, aunque se aplica mal: que una comunidad que atiende a pacientes de otra facture ese servicio a la región de origen. A estas alturas del siglo XXI no veo justificado calcular unas cifras por estadísticas turísticas o días de estancia, cuando a nadie le atienden en un centro sanitario sin que quede constancia. Si hay retrasos e ineficiencias en el sistema lo que hay que hacer es corregirlo.

Según sus informes la infrafinanciación valenciana es el origen de gran parte de la deuda autonómica. ¿En cuánto la cifran?

En ese cálculo se distinguen varios escalones. Primero sería cuanto hubiera sido menor la deuda si gastando lo que se gastó hubiéramos tenido un nivel de ingresos como la media de las autonomías. Segundo, el conjunto de CCAA han tenido un problema de ingresos después de la crisis financiera, una infrafinanciación generalizada. Tercero, en el caso valenciano se podría arrastrar una

“Según nuestros cálculos 37.000 millones, el 73% del endeudamiento valenciano, se explican por la infrafinanciación”

“El Ministerio no dice nada de eliminar los otros fondos que no responden a población ajustada y desfiguran el resultado”



en todas las CCAA? Durante la pandemia hemos visto esa situación con las estadísticas y seguro que dentro de Comunitat Valenciana hay los mismos problemas. Nos llama la atención la diferencia que existe entre las cifras de tarjetas sanitarias emitidas y las estadísticas de población a atender, por eso lanzamos esa advertencia.

¿Qué variables consideran más fiables para las necesidades sanitarias?

La que tiene más sentido es la que se maneja de población protegida y equivalente, la población teniendo en cuenta que las edades importan para la intensificación de la demanda de servicios. Una persona a los 70 años es más probable que demande servicios sanitarios que a los 25. Otro debate es el de la población flotante por los turistas, que algunos piden que entre en el cálculo. Sinceramente creo que el sistema más ra-

infrafinanciación de antes de 2002, cuando las competencias por CCAA eran muy diferentes. Por último, los intereses mayores que ha habido que pagar por la mayor acumulación de deuda. Estos cuatro factores sumarían 37.000 millones de euros, el 73% del total. El resto, 13.300 millones, sería la deuda que no se explica por la infrafinanciación y representaría el 12,6% del PIB regional frente al 48% que tenemos. Desde 2001 apenas habría aumentado en 3 puntos porcentuales frente a los 42 puntos en que ha crecido.

¿Hay soluciones para esa deuda?

En el informe de la Comisión Nacional de Expertos de 2017 yo hice un voto particular porque considero que corregir el problema de la infrafinanciación debería ir acompañado de corregir el endeudamiento. ¿De qué manera? Pues haciendo una condonación, una compensación que solo será efi-

caz si se corrige el origen del problema, la financiación.

Condonar deuda suena muy fuerte

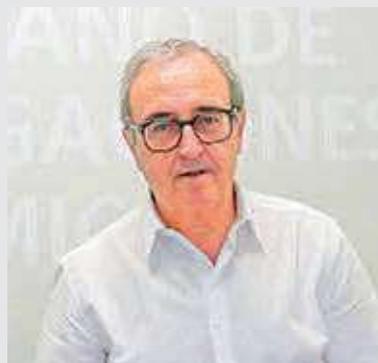
Una parte de la comisión de expertos estaba de acuerdo y otra parte no. Al final la comisión defendió la necesidad de reestructurar deuda, alargar plazos con condiciones favorables. Otros consideramos que eso no va a ser suficiente por el volumen de endeudamiento acumulado. Y porque el argumento para decir no a la condonación, que es evitar el riesgo moral de que si se perdona la deuda luego se corre el riesgo de que se vuelva a ser irresponsable, tiene una debilidad. En este caso no es que se haya sido irresponsable, es que se tenían menos ingresos. Con ese argumento al final lo que se dice es que por tener menos ingresos de manera injustificada se debería prestar servicios públicos de un menor nivel, y eso es otro riesgo moral: obligar a una parte de ciudadanía a recibir servicios más bajos como consecuencia de una injusticia financiera.

denante de la inflación, el alza de los precios de la energía, que lo previsible es que tras el primer golpe se vaya digiriendo poco a poco. Pero también hay otra parte, porque la inflación energética afecta a otros sectores y genera la inflación de segunda ronda, que es que la que viene cuando cualquier agente afectado por la inflación, empresa o trabajador, intenta recuperar el poder adquisitivo. Si nos negamos a aceptar que somos más pobres porque suben los precios de la energía que compramos fuera podemos pasarnos mucho tiempo dándonos codazos para que sean otros los que soporten los costes. Las espirales inflacionistas son consecuencia de estos efectos de segunda ronda. Si no hay un esfuerzo para frenar estos mecanismos de los precios mediante pactos de rentas, que es algo lógico, la inflación será más duradera.

La competitividad valenciana es una de las preocupaciones del Ivie. ¿Cuál es el diag-

“La subida de tipos es una amenaza porque por cada punto que suban son 500 millones más de carga financiera”

“Si no hay un esfuerzo para frenar los mecanismos de precios mediante pactos de rentas la inflación será más duradera”



¿Preocupa la subida en los tipos de interés que viene con esa deuda?

Es una amenaza. Si tenemos una deuda de más de 50.000 millones de euros, por cada punto que suban los tipos de interés la carga financiera aumentaría en 500 millones de euros. Si eso va acompañado de un episodio en que las facilidades de financiación de los últimos años no continúan nos veríamos abocados a una necesidad de ajuste que no padecen otras CCAA. Es importante señalar que los niveles de gasto en servicios fundamentales son similares a la media, no inferiores. La infrafinanciación ha generado más deuda porque el nivel de gasto y prestación se ha ido igualando a la media.

¿Es previsible que la inflación se mantenga en niveles elevados mucho tiempo?

La situación económica por la guerra vuelve a ser muy delicada. Hay un factor desenca-

nóstico y como se puede mejorar?

Detrás de nuestros problemas de competitividad muchas veces ha habido diferenciales positivos de inflación frente a nuestros competidores. Pero también diferenciales negativos de productividad. Y las causas de esos bajos niveles productivos siguen estando por abordar. Una de ellas es el predominio de empresas muy pequeñas que no aprovechan las economías de escala. Hay que seguir haciendo llamadas de atención a la importancia del crecimiento empresarial. No es que no tengamos líderes, es que tenemos una parte demasiado grande de empresas muy lejos de los líderes en productividad. Hay que insistir en las palancas para mejorarla, como una especialización en la que el uso del conocimiento sea una fuente de generación de valor y en la que el reto de la digitalización también es esencial en todos los sectores y todas las empresas.

Economía

Francisco Pérez Director del Ivie y coordinador del comité valenciano de expertos para la financiación autonómica

“El 73% de la deuda valenciana se explica por la infrafinanciación”

Ángel C. Álvarez VALENCIA.

El director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, cuestiona la propuesta técnica para la reforma del modelo de financiación del Ministerio de Hacienda porque “puede desfigurarse” el criterio de población ajustada y considera la condonación la única opción para el lastre de la deuda.

La sensación que tienen de los valencianos con la reforma de financiación autonómica es que los años pasan sin avances. ¿Es así?

Avances hay pocos. El más importante es el reconocimiento del problema, y no es insignificante, porque hubo un tiempo en que se negaba. Pero lo importante es que se solucione el problema y ahí siguen sin darse pasos. El argumento suele ser que se requiere de un amplio consenso que es difícil de conseguir ahora, pero creo que todos pagamos un precio por no hacer reformas que están justificadas. Tiene consecuencias porque retrasa que el despliegue del Estado del Bienestar se haga en las mismas condiciones en toda España.

Desde Valencia se reivindica el criterio de población ajustada, pero el informe del comité del que forma parte no considera tan positiva la propuesta del Ministerio

El criterio de población ajustada quiere decir que si queremos que haya igualdad el reparto tiene que hacerse de acuerdo con un criterio de necesidad. La Comunidad Valenciana asume ese criterio porque recibe menos recursos de los que tendría por habitantes. Actualmente no se sigue porque aunque una parte del modelo se reparte en proporción a una población ajustada, otras partes responden a otros criterios y desfiguran el resultado. Por eso se reivindica un criterio de población ajustada razonable, pero también eliminar lo que no es población ajustada del modelo, por ejemplo el *statu quo*: si a una comunidad le tocan menos recursos por población ajustada y antes tenía más se le siguen dando los de antes.

¿Esa es la crítica fundamental?

El Ministerio ha elaborado un documento que discute como se podría calcular esa población ajustada, pero no dice nada de una parte muy importante, que es eliminar otros fondos, porque si no estaremos en las mismas. Los recursos



GUILLERMO LUCAS

Líder en deuda:

“Corregir la financiación debe ir acompañado de corregir el endeudamiento”

Propuesta estatal:

“En nombre de la población ajustada se podrían justificar diferencias como las actuales”

Falta de consenso:

“Se reconoce el problema, pero lo importante es la solución y siguen sin darse pasos”

que van por esas otras vías tienen que repartirse también por población ajustada. Además, la propuesta técnica sobre los criterios para calcularla tiene una parte que no nos convence. Sugerimos mejoras en las variables demográficas. Hay otras variables, que son geográficas, en que los criterios nos parecen menos convincentes. Y plantea otra posible criterio: el tamaño de las comunidades porque considero que las pequeñas podrían tener unos costes fijos que les pesaran más. Hemos sido muy críticos porque no se concreta la forma de ponderar las variables y algunas de esas posibilidades podrían volver a dar lugar a diferencias de financiación por habitante injustificadas.

Con la propuesta planteada, ¿podría mantenerse la infrafinanciación valenciana?

Dentro de lo que se ha planteado podría volverse a dar una situación de infrafinanciación relativa, pero también dentro de la propuesta se podría dar la solución al problema. Dependerá del cierre. Al final podría pasar que en nombre de la población ajustada se acabaran justificando diferencias de financiación tan grandes como las actuales.

Según sus informes la infrafinanciación valenciana es el origen de

gran parte de la deuda autonómica. ¿En cuánto la cifran?

En ese cálculo se distinguen varios escalones. Primero sería cuánto hubiera sido menor la deuda si gastando lo que se gastó hubiéramos tenido un nivel de ingresos como la media. Segundo, el conjunto de CCAA han tenido un problema de ingresos tras la crisis financiera, una infrafinanciación generalizada. Tercero, en el caso valenciano se podría arrastrar una infrafinanciación de antes de 2002, cuando las competencias por CCAA eran muy diferentes. Por último, los intereses mayores que ha habido que pagar por la mayor acumulación de deuda. Estos cuatro factores sumarían 37000 millones de euros, el 73% del total. El resto, 13.300 millones, sería la deuda que no se explica por la infrafinanciación y representaría el 12,6% del PIB regional frente al 48% que tenemos ahora.

¿Hay soluciones para esa deuda?

En el informe de la Comisión Nacional de Expertos de 2017 hice un voto particular porque considero que corregir el problema de la infrafinanciación debería ir acompañado de corregir el endeudamiento. ¿De qué manera? Pues haciendo una condonación, una compensación que solo será eficaz si se corrige el origen del problema.

Condonar suena muy fuerte.

Una parte de la comisión de expertos estaba de acuerdo y otra parte no. Al final la comisión defendió la necesidad de reestructurar deuda. Otros consideramos que eso no va a ser suficiente por el volumen acumulado. Y porque el argumento para decir no a condonar, que es evitar el riesgo moral de que si se perdona la deuda se corre el riesgo de que se vuelva a ser irresponsable, tiene una debilidad. En este caso no es que se haya sido irresponsable, es que se tenían menos ingresos. Ese argumento al final lo que dice es que por tener menos ingresos de manera injustificada se debería prestar servicios públicos de menos nivel, y eso es otro riesgo moral: obligar a una parte de ciudadanía a recibir servicios más bajos por una injusticia financiera.

¿Preocupa la subida en los tipos de interés que viene con esa deuda?

Es una amenaza. Si tenemos una deuda de más de 50.000 millones de euros por cada punto que suban los tipos de interés la carga financiera aumentaría en 500 millones. Si eso va acompañado de un episodio en que las facilidades de financiación de los últimos años no continúan nos veríamos abocados a una necesidad de ajuste que no padecen otras CCAA.

Bruselas examina al INE en plena ofensiva del Gobierno

- Eurostat comienza hoy una evaluación de la labor de Estadística
- El Ejecutivo sostiene el PIB no está recogiendo bien la marcha de la economía y alude a los buenos datos de paro y recaudación

DANIEL VIAÑA MADRID Eurostat evaluará, desde este lunes y hasta el próximo viernes, la calidad y los procesos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y lo hará en un momento marcado por las muchas dudas que el Gobierno muestra antes los resultados que arroja el Producto Interior Bruto (PIB) y el insólito desacoplamiento que, a su entender, muestra esta variable frente a la evolución del paro y la recaudación tributaria.

El Ejecutivo considera que las cifras de creación de empleo y de ingresos por impuestos muestran que la economía va mejor de lo que muestra el PIB. «La recaudación son datos concretos, no una estadística, y lo que muestra es que la actividad es fuerte», apuntan por ejemplo desde el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, según la estadística del INE, que se integra en Eurostat con la que hacen los organismos del resto de países europeos, España se ha quedado muy atrás en la recuperación. Muestra claramente que todavía resta mucho para volver a los niveles previos al covid y que, como constató este mismo mes el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, la española es la gran economía del euro que peor lo ha hecho. Por mucho.

La supervisión por parte de la oficina estadística de la Comisión Europea no responde a esta ofensiva del Gobierno, sino a un proceso habitual que se lleva a cabo con cierta periodicidad. Pero el momento no puede ser más significativo y apropiado. En el INE insisten en que es un proceso habitual y que Eurostat acaba de finalizar en Alemania esta misma evaluación externa denominada *Peer Review*. Y añaden que los resultados en exámenes precedentes han sido muy positivos y que, también en esta ocasión, serán públicos. Esto es, que será una forma de responder a esos recelos del Ejecutivo que, por otra parte, no son en absoluto compartidos en el ámbito económico.

Este periódico ha consultado con algunos de los economistas más relevantes de España y nin-

guno de ellos creen que Estadística no esté realizando bien su labor, o que el PIB no esté registrando de manera correcta la situación económica. Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research; Jose E. Boscá, investigador asociado de Fedea; Gregorio Izquierdo, direc-

REVISIÓN POR IGUALES O 'PEER REVIEW'

'Hombres de negro'. La revisión que comienza este lunes por parte de Eurostat tiene como objetivo evaluar las prácticas de, en este caso, el INE así como «mejorar la transparencia» e «identificar las dificultades».

Cuarta evaluación. La primera ronda del 'peer review', según consta en la página del propio INE, fue en 2007. Posteriormente se han realizado exámenes en 2014 y también en 2017.

Análisis periódico. En el INE apuntan, por lo tanto, que la evaluación es un proceso que se lleva a cabo periódicamente, estos, que no responde a las dudas e incluso presiones del Gobierno.

Buenos resultados. Desde el Instituto Nacional de Estadística se subrayan, asimismo, los buenos resultados que el organismo ha obtenido en las anteriores evaluaciones a las que ha sido sometido.

tor general del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y ex director del propio INE; y Javier Andrés, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Todos ellos coinciden al destacar la «metodología rigurosa

del INE», que «no hay ni una razón sólida para dudar» del trabajo del organismo y que «es muy peligrosos empezar a dudar de entidades solventes».

«El PIB no tiene por qué coincidir con una parte de las referencias que lo integran, como puede ser el empleo o la recaudación. Y que dos aspectos se enfrenten, no quiere decir que uno de los dos esté mal», explica Izquierdo, que conoce perfectamente el proceso de elaboración de la Contabilidad Nacional.

«La recaudación ha ido muy bien porque ha habido subidas impositivas y porque se sospecha que ha aflorado economía sumergida. Y hay que tener en cuenta que todas las ventas de segunda mano, como pueden ser casas o vehículos, generan un aumento de recaudación importante pero apenas genera PIB», añade.

Doménech, por su parte, destaca «el sistema de información inmediata» dentro del IVA, y coincide en que es factible que hayan aflorado más bases tributarias. El incremento de pagos a través de sistemas electrónico, que se dispararon durante la pandemia, es clave en esto. «Además, el desacoplamiento depende de las variables que se observen. En horas trabajadas, ese desacoplamiento es menor. El INE lo lleva recalando desde que comenzó la pandemia, apuntando que las horas trabajadas es una referencia más adecuada por las estimaciones de PIB», prosigue. Y subraya: «El INE utiliza tantos indicadores para calcular el PIB que no tiene sentido coger un par de ellos para decir que la actividad va mejor o peor de lo que estima el INE».

«La brecha entre PIB y empleo no es tanta, y hay que tener en cuenta que han aflorado muchos empleos no declarados para poder acogerse a los ERTE. También es relevante que una parte importante del aumento del empleo se ha producido en el sector público», expone Boscá, que coincide al señalar el aumento de compras de vivienda: «La volatilidad, la inestabi-

La vicepresidenta Calviño, la presidenta Von der Leyen y el presidente Sánchez. EFE



Entre los economistas «no hay ni una razón sólida» para dudar de la labor del INE

Añaden que la brecha, especialmente entre el PIB y el empleo, «ya no es tan grande»

lidad, la guerra, el comportamiento de la Bolsa... Todo eso ha hecho que mucha gente acuda a la vivienda como inversión, que sí eleva la recaudación pero no el PIB».

«No hay ninguna razón para pensar que el INE lo esté hacien-

do mal. Si no, Eurostat le corregiría, ya que de esa estadística dependen muchas cosas», señala Andrés apuntando precisamente a la oficina estadística europea.

«Esto no quiere decir que, tal vez, haya algo que no se esté captando bien como consecuencia de los cambios que ha registrado la economía, como puede ser el teletrabajo, la reducción en la economía sumergida o el incremento facturas electrónica», añade, resumiendo así la opinión de todos los consultados. «Y el PIB es una convención», prosigue. Otros indicadores, como los que en algún momento se han tratado de lanzar especialmente desde el Ministerio de Economía para evidenciar que la economía está mejor, «no está estandarizados, todos hemos adoptado el PIB y es lo que nos permite hacer comparaciones temporales y entre países».



Europol y la Comisión ya persiguen el fraude con los fondos europeos

La 'operación Centinela' busca evitar la corrupción en torno al programa Next Generation

ALEJANDRA OLCESE MADRID

Casi dos años después de que el 21 de junio de 2020 el Consejo Europeo aprobara la creación del programa Next Generation, la Comisión Europea y la Europol ya están rastreando casos de fraude en la ejecución de esos fondos millonarios, cuyo despliegue se está llevando a cabo de forma acelerada.

Los fondos «ya han sido blanco de los estafadores que buscan acceder ilegalmente a estos miles de millones de euros de recursos.

Aunque se han establecido salvaguardias para evitar abusos a nivel nacional y europeo, las autoridades han tenido que distribuir estas ayudas tan rápidamente que esto ha debilitado algunos de los procedimientos de *due diligence* y ya ha permitido que algunos delincuentes se beneficien ilegalmente de estos fondos», advierte la Europol en su último informe sobre corrupción económica en la Unión.

Esta agencia para la cooperación policial lanzó en octubre de 2021 la

operación *Centinela* –*sentinel*, en inglés; *sentinelle*, en francés– para rastrear el fraude en los fondos europeos, junto a la Fiscalía Europea, a Eurojust –agencia para la cooperación judicial penal– y la OLAF, la oficina de la UE dedicada a investigar el fraude, la corrupción y las faltas graves en las instituciones y países europeos.

Esta última oficina se dedica a investigar presuntos casos de fraude a raíz de pistas o indicios que recibe del exterior –entre sus filas cuenta

con ex miembros de la policía de distintos países o incluso antiguos agentes de centros nacionales de inteligencia–, aunque también puede investigar casos concretos a iniciativa propia, explican a EL MUNDO fuentes conocedoras de su procedimiento desde Bruselas.

«La prevención de la delincuencia transfronteriza grave es el núcleo del mandato de Europol, y estamos plenamente comprometidos a apoyar a los Estados miembros en la lucha contra cualquier inten-

to de la delincuencia organizada de infiltrarse en la economía legal de la UE y en el fondo NextGenerationEU. Nuestro mensaje es claro: cualquier amenaza al NextGenerationEU es una amenaza directa al bienestar financiero de la Unión Europea y de sus ciudadanos. La *Operación Centinela* reforzará nuestra respuesta conjunta al fraude y protegerá la reconstrucción de nuestras comunidades», expuso en su lanzamiento Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol.

Esta organización sabe que los 672.500 millones de euros de préstamos y ayudas con los que se está regando a las economías de la Unión, para reconstruirlas y transformarlas tras el covid, atrae a grupos delictivos activos en la Unión Europea y fuera de ella que buscarán la evasión de impuestos, el fraude de impuestos especiales, la corrupción, la malversación, la apropiación indebida y el lavado de dinero.

Estas redes ya han estado operativas durante la pandemia y la Europol y la OLAF han interceptado a algunas de ellas. Un ejemplo podría ser el grupo delictivo arresta-

«Los estafadores» quieren acceder ilegalmente a miles de millones de euros»

do en Francia por parte de la Gendarmería Francesa y la policía israelí por estafar 12 millones de euros al estado francés mediante 3.600 empresas ficticias que canalizaban fondos de desempleo. Una vez percibidas las prestaciones, los fondos se transferían al extranjero y se cambiaban a criptomonedas.

«Por lo que parece, la magnitud de las ayudas ha llamado la atención de las organizaciones criminales [incluyendo la mafia italiana] y la Europol ha decidido abrir una línea de investigación nueva. De hecho, la organización intervino en junio pasado en el desmantelamiento en Francia de un red criminal para apropiarse de fondos europeos dirigidos al desempleo», apunta la Oficina de Fondos Europeos de PwC.

Quizá no fue casual que la primera reunión del proyecto *Centinela* se celebró en Roma en septiembre de 2021, para que las instituciones judiciales y policiales asistentes se coordinaran ante posibles amenazas a los fondos de recuperación. Una segunda reunión se ha celebrado en abril de este año, en La Haya.

La Europol espera que «algunos delincuentes se especialicen en abusar de estos planes orquestando complejas redes de empresas con el fin de defraudar fondos públicos». Y avisa de que se podrían perder «miles de millones de euros de ingresos públicos a través de IVA y otros fraudes», lo que perjudicará los intereses de los contribuyentes y, al final, en la capacidad de los gobiernos para financiar servicios públicos esenciales.

La inflación golpea a los 'millennials', la generación de la doble crisis

- ▶ Han sufrido dos convulsiones económicas sin precedentes: la de 2008 y la de 2020, y ahora la espiral de los precios les ha dado la puntilla
- ▶ La subida de tipos encarecerá sus hipotecas, heredarán una deuda desbocada y parte de la factura de las pensiones de los 'boomers'

SUSANA ALCELAY
MADRID

Cargados de títulos, digitalizados e hiperconectados. Son la generación milenial, nacida entre 1981 y 1995, la única de la historia que ha sufrido dos grandes crisis económicas en el transcurso de su formación e inserción laboral, la financiera de 2008 y la provocada por la pandemia en 2020. Si hace casi tres décadas luchaban por hacerse un hueco en el mercado de trabajo, hoy pelean contra la precariedad y los bajos sueldos, enredados en una escalada inflacionista desconocida en décadas que les golpea sin remordimiento en el bolsillo. A los más afortunados, los que han podido comprar una vivienda, la subida inminente de los tipos de interés les encarecerá más la factura; en el horizonte, pagarán los excesos de una deuda pública asfixiante y parte de la factura de los 'boomer', un 'ejército' de jubilados que comenzará a retirarse en 2023.

«El problema de esta generación va incluso más allá de no ver satisfechos sus objetivos laborales: tienen dificultades para encontrar un empleo fijo, emanciparse y, por lo tanto, muchos aún viven en casa de sus padres y no tienen una buena situación económica», asegura un estudio del BBVA.

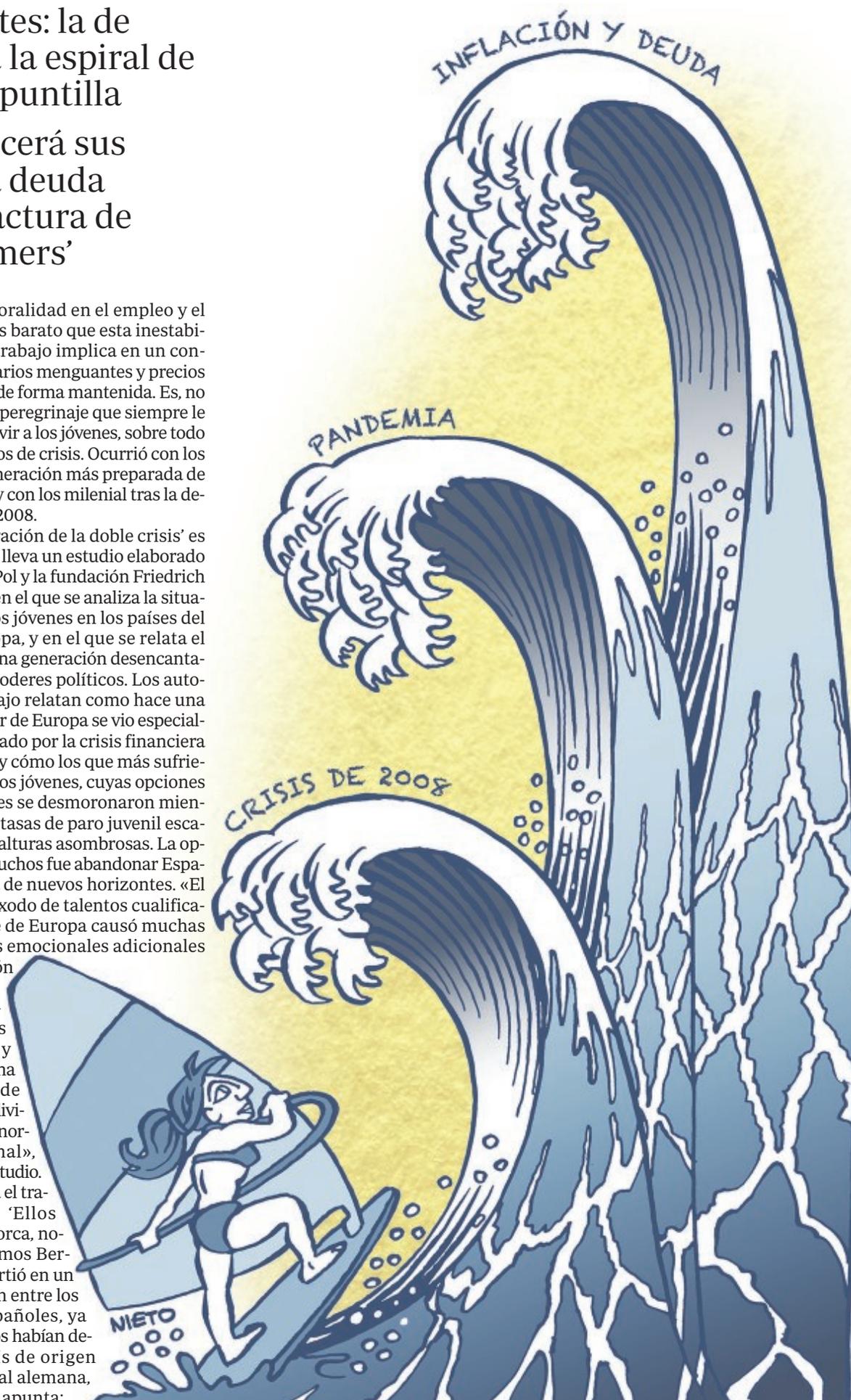
Los 'millennials' optaron por estudiar y formarse en los años de la crisis financiera ante las pocas expectativas laborales que se abrían en un mercado que llevó las cifras de paro hasta los seis millones, aunque algunos decidieron abandonar de forma temprana sus estudios al calor del 'boom' inmobiliario y los elevados sueldos que se ofrecían en la construcción. Hoy, muchos de los que eligieron el camino de la formación tienen un trabajo, pero sufren como na-

die la temporalidad en el empleo y el despido más barato que esta inestabilidad en el trabajo implica en un contexto de salarios menguantes y precios disparados de forma mantenida. Es, no obstante, el peregrinaje que siempre le ha tocado vivir a los jóvenes, sobre todo en momentos de crisis. Ocurrió con los 'JASP', la generación más preparada de los años 90 y con los milenial tras la depresión de 2008.

«La generación de la doble crisis' es el título que lleva un estudio elaborado por EsadecPol y la fundación Friedrich Naumann, en el que se analiza la situación de estos jóvenes en los países del sur de Europa, y en el que se relata el periplo de una generación desencantada con los poderes políticos. Los autores del trabajo relatan como hace una década el sur de Europa se vio especialmente afectado por la crisis financiera y de deuda, y cómo los que más sufrieron fueron los jóvenes, cuyas opciones profesionales se desmoronaron mientras que las tasas de paro juvenil escalaron hasta alturas asombrosas. La opción para muchos fue abandonar España en busca de nuevos horizontes. «El inevitable éxodo de talentos cualificados al norte de Europa causó muchas dificultades emocionales adicionales en una región donde los lazos familiares son más estrechos, y donde el clima y el estilo de vida más individualista del norte encaja mal», asegura el estudio.

Recuerda el trabajo como 'Ellos tienen Mallorca, nosotros tenemos Berlín' se convirtió en un lugar común entre los jóvenes españoles, ya que «muchos habían dejado su país de origen por la capital alemana, solos». Y se apunta:

Y mientras, Sánchez dibuja una España 'idílica' en 30 años con 'herencia pública' para que los jóvenes compren una vivienda



«Se dijo que esta había sido una crisis única en una generación, y que pronto las cosas mejorarían. La pandemia acabó con esa idea para siempre».

El presente para los 'millennials' es complejo, pero el futuro llega cargado de hipotecas. El BCE ha intensificado sus mensajes en los últimos días para marcar el paso ante los inversores y para transmitir tranquilidad a los ciudadanos ante la escalada inflacionista con una política que anticipa subida de tipos inminente para hacer frente a la presión de los precios en Europa. La consecuencia más inmediata para los que tengan hipoteca será un encarecimiento de la factura, y los jóvenes, de nuevo, serán los principales perdedores.

Pero las próximas décadas llegan con otras hipotecas, las que se extenderá con un volumen de deuda pública desconocido y por un gasto en pensiones desbordado en la antesala de la llegada de la generación del 'baby boom', 14 millones de niños nacidos entre 1958 y 1977, que mañana se convertirán en jubilados con largas carreras de cotización y sueldos elevados.

En su informe de estabilidad financiera de abril el Banco de España dibujó un horizonte más negro que blanco con una deuda y déficit públicos desbordados y sin plan para atajar los desequilibrios. Este mes el supervisor alertaba sobre la espiral de gasto en pensiones, las nulas medidas para frenar su escalada y anticipaba que, sin medidas que contribuyan a poner los costes del sistema bajo control, el déficit podría anclarse de forma estructural en niveles próximo al 6% del PIB y la deuda pública llegar al 140% del PIB. Una pesada losa para los jóvenes que hace plantearse a los economistas si es compatible con la solidaridad intergeneracional.

Más cargas en diez años

La subida de cotizaciones del 0,6% durante una década planteada por Escrivá para afrontar el gasto en pensiones ya provocó que prestigiosos economistas alzarán la voz para alertar de la carga que supondrá para los jóvenes el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. «El MEI no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, al menos durante la próxima década. Más bien al contrario, traspasa una parte del mayor coste de la jubilación de las generaciones del 'baby boom', más numerosas y con mayor esperanza de vida, a las generaciones más jóvenes que continúan trabajando, aumentando así la inequidad del sistema», avisaban el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, Enrique Devesa, y Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA, en un artículo del que informó ABC.

Todo lo anterior es muy distinto al escenario que ha diseñado el Gobierno para España en los próximos 30 años. Un proyecto idílico cargado de impuestos y un «herencia pública» para que los jóvenes se compren una vivienda o monten un negocio. Lo que no refleja el proyecto es que esas facturas públicas hay que pagarlas y que serán ellos, los jóvenes, los que deberán afrontarlas.

JOSÉ, SANTIAGO DE COMPOSTELA, 33 AÑOS

«La situación durante el Covid me arrastró a dejar la enfermería»

LUIS GARCÍA LÓPEZ MADRID

Cuando la crisis financiera empezó a agitar la economía a principios de 2008, José Liñares estaba en segundo de carrera. Estudiaba en Pontevedra, donde tenía su piso y su grupo de amigos. Decidió volver a su Santiago de Compostela natal al siguiente año, donde volvió a vivir con sus padres para ahorrar costes. «En 2012 se rompían currículos de la excesiva demanda de enfermeros», afirma Liñares.

Con la pandemia, su situación laboral se mantuvo estable gracias a su sueldo de enfermero, pero el estrés y la desinformación que marcaron los primeros meses de convivencia con el coronavirus le empujaron a tomar una



importante decisión: «La situación me arrastró abandonar la enfermería». Actualmente vive con su mujer Raquel, y ambos reconocen la importancia del apoyo incondicional de sus familias, un pilar de seguridad que les acompañó siempre.

PAOLA, ZARAGOZA, 35 AÑOS

«Me da la sensación de estar en una crisis permanente»

CARLOS MANSO CHICOTE MADRID

Paola Rodríguez (35 años) vive cerca de Zaragoza con su pareja e hijo. A la pregunta de si la actual alza de precios le está impactando cita a modo de anécdota que «nunca he mirado en la vida la factura del gas y, ahora, vamos buscando el ahorro todo el tiempo». También han cambiado de com-



pañía eléctrica. «Me da sensación de vivir en una crisis permanente», reconoce esta publicista de formación que en la actualidad trabaja en Correos. Como a muchos 'millennials' su bautismo con el mundo laboral no pudo llegar en peor momento: la crisis de 2008. «La viví como un tobogán hacia la precariedad» resume con humor. Cuatro becas sin remuneración en los 18 meses posteriores a su regreso de su Erasmus en Roma, hasta que un día se hartó y se puso a trabajar de camarera. «Estuve un año y medio ganando 1.500 euros mensuales y estaba contenta», recuerda de un tiempo en que «todavía tenía ilusiones de trabajar en Publicidad, todavía creía en la meritocracia». En 2019 fue madre y decidió oponer a Correos en busca de mejores condiciones.

BEATRIZ, SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 AÑOS

«Vivir sola e independizarse es todo un logro»

LUIS GARCÍA LÓPEZ MADRID

La generación que se formaba durante los años de recesión tras la crisis financiera se encuentra de nuevo ante un escenario adverso. «Desde nuestras casas nos inculcaban que con una carrera obtendríamos un buen trabajo y un buen sueldo. Con el tiempo, nos encontramos con trabajos mal pagados y con malas condiciones, como si todo fuese un engaño», co-



menta Beatriz Vilar, santiaguesa de 28 años. Tras especializarse como psicóloga general sanitaria, Vilar optó, como otros compañeros de profesión, por hacerse autónoma para trabajar como colaboradora en varias clínicas de forma paralela. Una solución ante la falta de plazas públicas para psicólogos. «El hecho de poder vivir sola e independizarme es todo un logro», afirma la psicóloga.

MIGUEL, LEGANÉS, 27 AÑOS

«Nos pedían estudiar y me he formado, pero no se ha cumplido la promesa de la meritocracia»

C. MANSO MADRID

Miguel Rodríguez es de Leganés (Madrid) y tiene 27 años. Este joven trabaja en una empresa de comida rápida con un contrato indefinido, aunque trabaja en horario nocturno. «Es un trabajo diseñado para gente joven que está estudiando, son pocas horas y el sueldo es bajo», apunta. Lo que, reconoce, no le ha ayudado a independizarse - vive con sus padres - ya que, en su opinión, «la vivienda está por la nubes en Leganés: O te vas con pareja o compartes». Miguel comparte con otros 'millennials' la sensación de que «no se ha cumplido la promesa de la meritocracia» y recuerda que «nos pedían estudiar y me he formado». En este sentido, cree que su generación vivirá peor que la de sus padres.



FERNANDO, 38 AÑOS

«¿Ha merecido la pena volver a España? Esta es la pregunta que llevo haciéndome meses»

C. MANSO MADRID

Hace 11 años Fernando Maqueda (Madrid, 38 años) emprendió un viaje a Australia, país en el que ha residido hasta el pasado mes de febrero trabajando para empresas como la minera BHP Billiton. El estricto confinamiento del país le hizo replantearse cosas: «Como australiano no pude salir del país en dos años», recuerda Fernando quien habla de asombro por el fuerte alza de precios y, como ejemplo, cita los 3 euros que le cobraron por una caña en Barcelona. Ahora busca un empleo: «No descarto volver a estudiar ni moverme a otro país europeo». En cualquier caso, reconoce que «esta es la pregunta que llevo meses haciéndome: ¿Ha merecido la pena volver a España?».

Pensiones: reformas insuficientes

El desafío demográfico que se cierne sobre las pensiones, amplificado por la reversión de las reformas de 2013 y las medidas tomadas en los últimos años, va a someter a las pensiones a una situación bastante más complicada que la actual.

**Enrique Devesa
y Rafael Doménech**

El sistema de pensiones es un pilar básico del Estado de Bienestar que caracteriza a las sociedades avanzadas. Su objetivo es asegurar durante la jubilación unas condiciones de vida similares a las disfrutadas a lo largo de la vida activa en el mercado de trabajo. Durante décadas, su financiación no ha constituido un serio problema. En el pilar de reparto del sistema público de la mayoría de los países europeos, el aumento de los ingresos conforme lo hacía el de cotizantes compensaba el incremento de gasto, incluso a medida que aumentaba la esperanza de vida. Al mismo tiempo, en muchos países se desarrollaron ampliamente los pilares de planes de empleo de empresas y de planes de pensiones individuales, como una renta complementaria a la de los sistemas públicos.

Con algunos matices, España no ha sido una excepción a esta tendencia europea. Durante décadas se pudo mantener la edad de jubilación en los 65 años con una tasa de prestación (pensión media sobre salario medio) muy elevada y un déficit actuarial creciente (el valor presente descontado de las pensiones durante la jubilación excede ampliamente el de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida laboral) gracias al aumento de la ratio de cotizantes sobre pensionistas. La situación cambió rápidamente con la Gran Recesión: el sistema entró primero en un déficit cíclico en 2011, como consecuencia de la recesión económica, al que se superpuso un déficit estructural, debido al envejecimiento relativo de la población y a una tendencia demográfica más adversa que imposibilitaba mantener la autosuficiencia del sistema sin cambios en su diseño. En 2019, antes de la crisis del Covid, a pesar de que la actividad y el empleo se encontraban ya ligeramente por encima de sus niveles de equilibrio de largo plazo, el sistema de pensiones mostraba un déficit contributivo por encima del 1,5% del PIB. La crisis provocada por la pandemia en 2020 aumentó el déficit, ya que el gasto siguió incrementándose mientras que los ingresos dis-

minuyeron como consecuencia de la misma. La recuperación económica prevista de 2022 a 2025 será insuficiente para reducir el déficit contributivo, que en el escenario más probable irá aumentando progresivamente hasta alcanzar el 2,7% del PIB en los próximos tres años.

Desde 2011 se han emprendido tres reformas, pero el balance neto es de una década perdida. La reforma de 2011 aumentó gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, lo que, junto con otros cambios y la propuesta de introducción de un Factor de Sostenibilidad, compensaban durante un tiempo los efectos del aumento de la esperanza de vida sobre el déficit del sistema. La reforma de 2021 ha eliminado el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), ha vuelto a la actualización de las pensiones con la inflación y ha sustituido el Factor de Sostenibilidad por un Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que lo único que hace en la próxima década es aumentar las cotizaciones sociales. A falta de otros cambios que tengan lugar en 2022, todo apunta a que el sistema de reparto saldrá de esta nueva etapa de reformas con un aumento de déficit contributivo en las próximas décadas.

Autónomos

En cuanto a las propuestas de cambios en el régimen especial de trabajadores autónomos, por el momento no se ha alcanzado un acuerdo ni se vislumbra que se eliminen sus diferencias con el régimen general de trabajadores asalariados. Todo apunta a que tampoco se corregirá su abultado déficit actuarial. Tanto en un régimen como en otro, lo ideal sería avanzar gradualmente hacia un sistema de reparto basado en cuentas notacionales individuales que, además de satisfacer su equilibrio actuarial y financiero, aumente la equidad y asegure los mismos derechos para cada euro cotizado, independientemente de que lo haga un trabajador por cuenta ajena o propia.

Respecto a los planes de empleo de empresas y de pensiones individuales, España se ha caracterizado por una acumulación de ahorro en estos dos pilares del sistema de pensiones muy inferior al de otros

RADIOGRAFÍA DEL SISTEMA DE PENSIONES

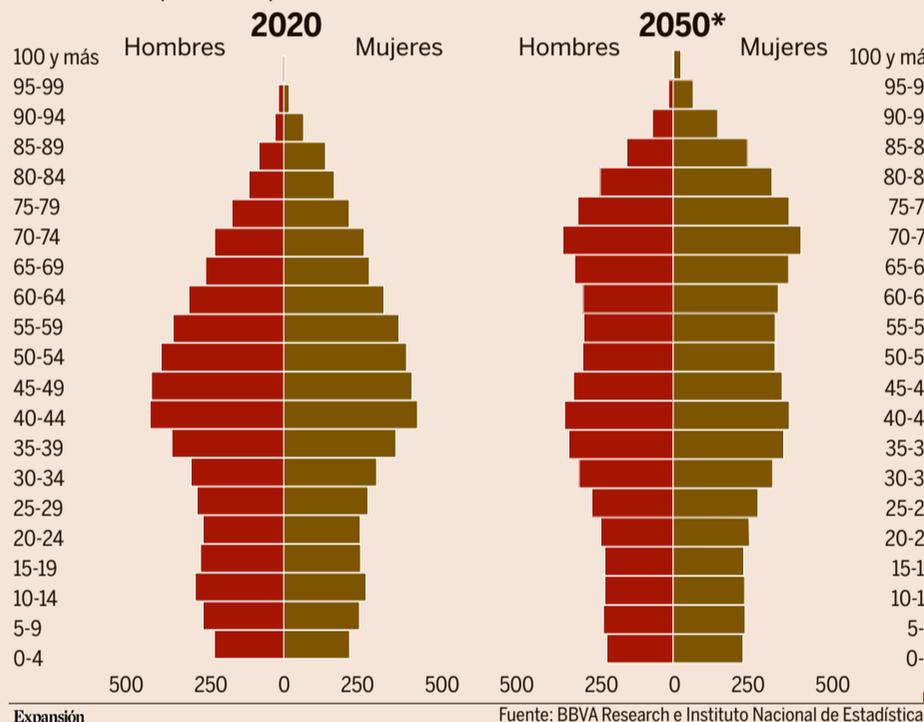
> El creciente desequilibrio del sistema de pensiones

En millones de euros



> La desfigurada pirámide demográfica

En miles de personas por cada cohorte de edad.



Lo más probable es que el déficit del sistema se eleve progresivamente al 2,7% del PIB en 2025

Las pensiones saldrán de esta etapa con un aumento de déficit contributivo en las próximas décadas

países europeos. Las razones de ello se deben a un tejido productivo muy dominado por micro y pequeñas empresas, reducidos estímulos fiscales y, sobre todo, unas tasas de sustitución en el sistema de reparto insostenibles a futuro,

pero muy elevadas, que no incentivan el ahorro complementario para la jubilación. Para tratar de atajar este problema, actualmente el Congreso está tramitando el proyecto de ley de regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo. A diferencia de otros países de Europa, como Suecia o Reino Unido, se ha desestimado la adscripción automática de trabajadores y empresas a estos planes (como ocurre por ejemplo con el NEST británico), pero a cambio se promueven los fondos de promoción pública. El problema de esta reforma para impulsar el segundo pilar es que se establece un límite en la deducción de la base imponible de 8.500 euros para los planes colecti-

vos, frente a la reducción a los 1.500 de los planes individuales. Por un principio de neutralidad regulatoria y fiscal, los planes colectivos e individuales deben gozar del mismo tratamiento. Por lo tanto, la propuesta no corrige la insuficiencia de ahorro de la jubilación de España frente a otros países; únicamente sustituye, en el mejor de los casos, un pilar de ahorro complementario por otro, en lugar de potenciar los dos simultáneamente, como ya hacen las sociedades europeas más avanzadas.

Otra reforma prevista para 2022 es la ampliación del período para el cálculo de la base reguladora de la pensión desde 25 a 35 años. Hay un elevado grado de incertidumbre respecto a si se seleccionarán

o no los mejores 25 años y si se modificará la integración de las lagunas de cotización. La decisión sobre estos aspectos no es baladí porque se podría pasar de un ahorro del gasto de 0,9 puntos de PIB en 2050 con los 35 años, a un incremento de 0,7 puntos de PIB si se eligen los mejores 25.

También está previsto el destope gradual de la base de cotización máxima y de la pensión máxima, pero su influencia sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones va a depender de la velocidad a la que se realicen las dos modificaciones, ya que la primera afectaría a los ingresos corrientes y la segunda a los gastos futuros. Ante las previsiones de un déficit creciente, el destope de la base máxima de cotización genera, además, incertidumbres sobre la contributividad y equidad del sistema.

Las proyecciones demográficas y el aumento de la esperanza de vida van a someter al sistema de pensiones en España a un reto de sostenibilidad muy superior al actualmente existente, con un déficit contributivo de partida creciente y que ya se sitúa en el 2,2% del PIB. Este desafío debe abordarse mejorando la autosuficiencia, la contributividad y la equidad del sistema de reparto, al tiempo que se fortalecen los sistemas complementarios. Renunciar a cambios graduales como disminuciones de la tasa de prestación, a ligar pensiones a la esperanza de vida, a aumentar la edad legal de jubilación, o a considerar toda la carrera laboral, como vías para ir reduciendo el déficit actuarial de las nuevas pensiones, aboca a la economía española a un aumento creciente y significativo de la presión fiscal, que puede llegar a los 6 puntos porcentuales del PIB, o a futuras reducciones abruptas y no anticipadas de las pensiones, sin rentas complementarias suficientes en la jubilación. En última instancia, se trata de un escenario que supone un lastre para la convergencia de España a las economías más avanzadas de la Unión Europea en términos de empleo, productividad, renta per cápita y estado de bienestar.

Enrique Devesa, Universidad de Valencia, IVIE, Polibienestar; Rafael Doménech, BBVA Research y Universidad de Valencia